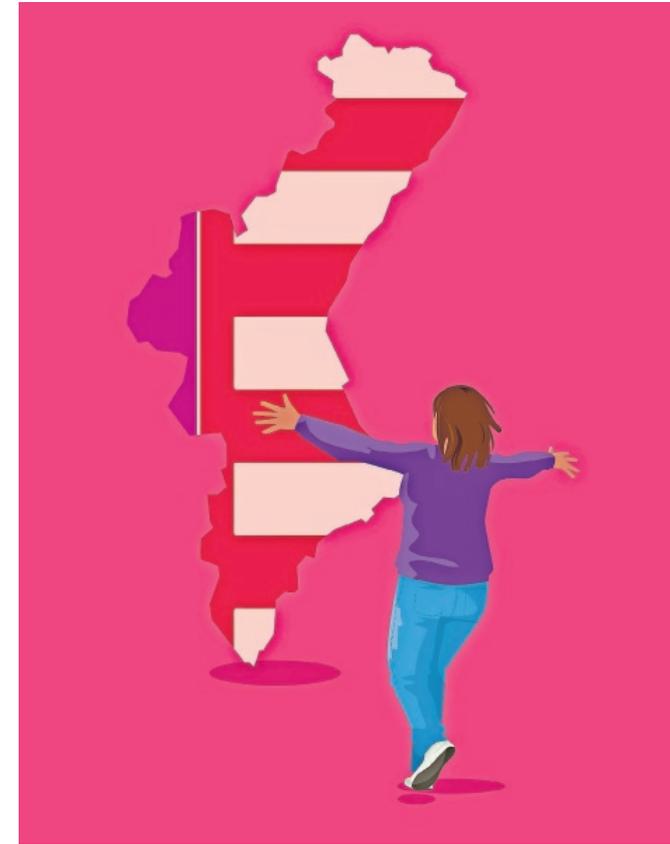


**LABORATORIO
DE IDEAS****CATÁSTROFES**
MATILDE MAS

La sociedad civil ante la dana

Han pasado ya tres meses desde que la dana arrasó 89 municipios de la provincia de Valencia y acabó con la vida de 224 personas. Según estimaciones del Ivie, ha destruido activos privados y públicos por valor de, al menos, 17.000 millones de euros. Las evidencias acumuladas de fenómenos similares recomiendan seguir tres reglas para optimizar la recuperación: I. Las ayudas deben llegar a la mayor brevedad para salvar personas y negocios. II. La recuperación debe diseñarse con visión de largo plazo y con la coordinación de todos los niveles de gobierno. III. La confianza en las instituciones es clave. No se cumple ninguna de las tres. La desconfianza actual tiene precedentes: a la financiación del Plan Sur —que desvió el cauce del río Turia tras la riada de 1957— contribuyeron los sellos de Correos que pagaron los valencianos durante 20 años. Ahora comprueban, con desánimo y rabia, la lentitud y descoordinación con la que llegan los recursos públicos, preguntándose si serán suficientes para evitar el estancamiento duradero de la zona.

Por el contrario, la sociedad civil respondió rápido. En todo el mundo se vieron las imágenes de miles de voluntarios, mayoritariamente jóvenes, desplazados a las zonas inundadas. Pero su solidaridad era claramente insuficiente al no disponer de la maquinaria pesada necesaria para las tareas de limpieza, no contar con la organiza-



MARAVILLAS DELGADO

ción y coordinación que exigían los múltiples frentes abiertos, ni tampoco de liquidez para ayudar a personas y negocios.

A los voluntarios se añadieron los agricultores, que no dudaron en acudir con sus tractores a limpiar las calles mientras llegaba la UME. El ecosistema innovador valenciano contribuyó con una serie de soluciones tecnológicas destinadas a facilitar la coordinación de voluntarios y afectados. Una avalancha de donaciones privadas acudió al rescate a través de organizaciones con

finés sociales (como Cruz Roja y Cáritas), colegios profesionales y asociaciones empresariales entre otros muchos, que han canalizado recursos económicos y profesionales para ayudar a paliar el daño inmenso.

A título individual destacan tres iniciativas: el chef José Andrés (World Central Kitchen) —que durante 50 días distribuyó más de cinco millones de comidas—, y las fundaciones de Juan Roig y Amancio Ortega, la primera más orientada a las empresas y la segunda a las personas.

La iniciativa de Juan Roig, *Alcem-se!* (¡levantémonos!), se articula a través del polo emprendedor Marina de Empresas. A mediados de diciembre ya había inyectado 35 millones a fondo perdido a 4.600 negocios entre pymes, comercios y *start-ups* con el objetivo de reactivar lo antes posible el tejido económico y reducir al máximo las empresas forzadas a cerrar por falta de liquidez. Las solicitudes ascendieron a 6.000 y la selección la llevaron a cabo técnicos de Marina de Empresas, lo que contribuyó decisivamente a la rápida distribución de las ayudas. *Alcem-se!* ofrece también un agregador de iniciativas solidarias, y canaliza la oferta de 500 espacios de oficinas por parte de las *start-ups* valencianas.

La Fundación Amancio Ortega ha donado 100 millones —canalizados por los ayuntamientos afectados— para mitigar las pérdidas sufridas por las personas físicas que han visto dañadas sus viviendas, mobiliario, enseres, electrodomésticos, vehículos esenciales para su trabajo o que han perdido su fuente principal de ingresos.

Al menos dos iniciativas más merecen mencionarse. SoliDANA (Cámara de Comercio) casa las peticiones de los demandantes de ayuda con los potenciales oferentes, promoviendo así un “ecosistema de solidaridad empresarial” que, además, contribuye a recuperar al menos parte del capital no destruido. La segunda, la aceleradora solidaria D_NA —fondo creado por compañías grandes y cotizadas—, ofrece préstamos participativos sin intereses de entre 50.000 y 200.000 euros, junto con servicios como asesoramiento estratégico y acceso a redes de expertos para refloatar empresas.

Junto al mal sabor de boca por las inexistentes señales de coordinación entre los gobiernos y la lenta respuesta, la dana nos deja dos lecciones reconfortantes: la juventud no es de cristal, y son muchos los empresarios que no tienen como único objetivo la maximización del beneficio.

Matilde Mas, Universitat de València e Ivie.

“**Las inundaciones evidencian que son muchos los empresarios que no solo buscan maximizar los beneficios**”

EFICIENCIA / CARMEN LÓPEZ Y MARINA ASENSIO

La evaluación de las medidas públicas

La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España ha llegado tarde, pero está cobrando una relevancia crucial. La aprobación de la ley para la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, junto con la necesidad de medir el resultado e impacto de los fondos europeos en todas sus versiones (especialmente los Next Generation), ha situado esta práctica en la órbita de la agenda política y administrativa.

En un país tan descentralizado como el nuestro, uno de los desafíos es la distribución de las competencias evaluativas entre los distintos actores implicados. Organismos como la Autoridad Independiente de Res-

ponsabilidad Fiscal (AIReF), la futura Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y los departamentos y organismos regionales y locales deberán coordinarse de manera eficaz. Sin esta coordinación, existe el riesgo de duplicidades y solapamientos. Es necesario establecer mecanismos de colaboración que generen análisis complementarios y, sobre todo, que faciliten la creación de un repositorio común de evidencias accesible a todos.

Un repositorio centralizado no solo simplificaría el acceso a la información, sino que también impulsaría un debate político más informado y fundamentado en evidencia contrastada. Ejemplos como el repositorio de evaluaciones de AIReF, el Science4Policy del CSIC o los esfuerzos liderados por insti-

tuciones como Ivalúa en Cataluña y el Instituto Andaluz de Administración Pública en Andalucía demuestran el potencial de estas herramientas. Desde el ámbito académico, iniciativas como la revista *Journal of Policy Evaluation*, de acceso libre y promovida por la Sociedad Española de Evaluación, Ksnet y Afi, constituyen un valioso espacio para compartir evidencia científica y enriquecer la toma de decisiones.

Otro desafío igualmente importante es garantizar que este esfuerzo evaluador no se limite al plano técnico. Evaluar no es solo una herramienta técnica que muchos disfrutamos utilizando; es (o debería ser) un imperativo para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados

efectivos para la ciudadanía. Especialmente en un contexto marcado por fuertes presiones sobre el gasto social y la necesidad de aumentar la inversión para evitar que Europa caiga en la irrelevancia geoestratégica y económica. Su éxito radica en que las evaluaciones sean entendidas y utilizadas como herramientas esenciales por los responsables políticos y la sociedad en su conjunto. Una evaluación efectiva no busca únicamente identificar errores o aciertos, sino aprender de ellos para diseñar mejores políticas en el futuro.

En un contexto de creciente demanda de transparencia y eficiencia, España debe mejorar en la planificación, ejecución y uso de la evaluación de políticas públicas. Apostar por este enfoque no solo fortalecerá la confianza en las instituciones, sino que también contribuirá a un uso más responsable y efectivo de los recursos públicos.

Carmen López y Marina Asensio son profesoras de Afi Global Education.